

Título de la ponencia: “Ocupar para negociar”: Las tramas políticas y las experiencias cotidianas de las ocupaciones colectivas de espacios públicos.

Autora: Virginia Manzano (UBA/CONICET), virginiamanzan@gmail.com

INTRODUCCIÓN: LA PROTESTA EN SU TRAMA

Las políticas de orientación neoliberal que se aplicaron en Argentina durante los últimos veinte años generaron el aumento de los niveles de desocupación y pobreza¹ y la reestructuración del Estado a partir de recomendaciones de ajuste fiscal y reducción del gasto público que emanaron de organismos multilaterales de crédito.

Las intervenciones de estos organismos se expresaron, entre otras cosas, en la puesta en funcionamiento de variados programas asistenciales orientados por la estrategia de *workfare* propiciada por el Banco Mundial, cuya característica distintiva es el requerimiento de *contraprestación* de los beneficiarios a cambio de una “ayuda económica” por debajo del salario mínimo² (Jalan y Ravallion, 1999).

En este contexto, se intensificaron procesos de movilización social en los que tuvieron un papel destacado agrupamientos de desocupados y organizaciones que nuclearon a trabajadores de fábricas y empresas recuperadas. Un conjunto de investigaciones puso de manifiesto cómo los programas estatales orientados por la estrategia de *workfare* se convirtieron en objeto de demanda de los diversos agrupamientos de desocupados como también así en eje de intercambios cotidianos por medio de la gestión colectiva de planes de empleo, bolsones alimentarios, becas estudiantiles, botiquines sanitarios y más recientemente créditos para microemprendimientos (Svampa, 2003; Quirós, 2006; Manzano, 2007).

¹ La desocupación en Argentina alcanzó un hito histórico en el año 2002, ya que afectó al 21.5 por ciento de la población económicamente activa (INDEC). Este porcentaje es aún más significativo si se tiene en cuenta que en el año 1975, o sea en la época previa a la implementación de políticas neoliberales, este país tenía una tasa de desocupación de 2.4 por ciento (INDEC).

² Desde el año 1993, el Ministerio de Trabajo desarrolló una serie de acciones definidas como *políticas activas de empleo*, las cuales contemplaron la puesta en funcionamiento de programas de ocupación transitoria y capacitación laboral que requerían de la contraprestación de los destinatarios a cambio de una “ayuda económica no remunerativa” en proyectos de utilidad comunitaria ejecutados por gobiernos municipales y ONGs.

Entre las acciones de movilización sobresalieron *los piquetes*, que crecieron en número desde 1997, concentrándose la mayor frecuencia durante los años 2000 y 2001. Los bloqueos de ruta no constituían una novedad en la historia argentina; sin embargo, los *piquetes* en las ciudades de de Cutral-Có y Plaza Huincul (provincia de Neuquén) en 1996, y posteriormente los que sucedieron en las localidades de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), y en Ledesma (provincia de Jujuy), se convirtieron en modelos que fueron retomados en otras regiones del país.

Diversos trabajos académicos vieron en el piquete un indicador de la transformación de los *repertorios de acción colectiva* en Argentina (Auyero, 2002; Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Schuster, 2005). Este enfoque contribuyó a revertir explicaciones mecanicistas que entendían la protesta social como reacción espontánea frente a la pobreza y el desempleo (Auyero, 2002). Para esta línea de investigación, los procesos estructurales no inciden de forma directa sobre la forma y el sentido de la “beligerancia popular”, sino que impactan en los intereses, las oportunidades y la organización colectiva. Prestando atención a las regularidades en la acción se ha propuesto una interpretación que coloca a los piquetes en el centro de un nuevo repertorio de acción colectiva vinculado a desocupados y empleados públicos, y que se distingue de la protesta del movimiento obrero centrada en la huelga (Farinetti, 1999; Auyero, 2002).

Otros estudios sostienen que los cortes de ruta en las provincias de Neuquén, Salta y Jujuy representaron el punto inicial a partir del cual una nueva identidad –los piqueteros–, un nuevo formato de protesta –el corte de ruta–, una nueva modalidad organizativa –la asamblea– y un nuevo tipo de demanda –el trabajo– quedaron definitivamente asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Svampa, 2005). También se afirmó que las ocupaciones ilegales de tierras (asentamientos), los cortes de ruta (piquetes), las revueltas populares para exigir la renuncia de autoridades provinciales o nacionales (estallidos), y el asalto de comercios en situaciones de crisis económicas agudas (saqueos) constituían los componentes de un nuevo repertorio de acción de las clases populares argentinas (Merklen, 2005). Esta transformación se explica conectando tres elementos: la exterioridad de los sectores populares respecto de las relaciones salariales clásicas, el anclaje territorial de estos grupos sociales y una nueva relación con el Estado, centrada en el conflicto por la distribución de ayuda social (Merklen, 2005).

Los trabajos sobre repertorios de acción colectiva recuperan la propuesta teórica del historiador Charles Tilly (2000). Esta propuesta, así como también la de Tarrow (1997), se concentra en el estudio de los cambios de repertorio en función de *tiempos largos*, retomando las ideas de la Escuela Historiográfica de Annales. El objetivo de ambos investigadores era mostrar que los incentivos para la acción colectiva se formaban en la interacción entre los grupos sociales y el sistema político. Se interesaron, entonces, por la variación de los incentivos en el marco de la “Gran Transformación” que tuvo lugar en Europa entre los siglos XVII y XIX.³ En otras palabras, analizaron los cambios de los repertorios de acción colectiva en la transición entre el modo de producción feudal y el capitalista, prestando especial atención a la influencia de la prensa escrita, las asociaciones y la alfabetización (Tarrow, 1997). El resultado de esos análisis, sobre todo por la adopción de un enfoque temporal de larga duración, tendió a enfatizar la homogeneidad en las formas de acción colectiva, tomando como criterio la comparación entre una época y otra. Como consecuencia, los estudios argentinos que se apoyaron en este marco teórico, aunque trabajaron con una escala de tiempo corto, sobredimensionaron la homogeneidad del repertorio de acción colectiva en el que se inscribe el piquete en comparación con las protestas del movimiento obrero.

En esta ponencia propongo desplazar la mirada que concibe al piquete como elemento de un repertorio de acción colectiva homogéneo frente a la movilización del movimiento obrero, para iluminar el cuadro de relaciones sociales que hicieron de él una forma apropiada de establecer vínculos con el Estado.

El trabajo de campo prolongado en el distrito de La Matanza –Gran Buenos Aires- me permitió observar y reconstruir los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001. En ambos “cortes” participaron concejales municipales que eran al mismo tiempo militantes de la agrupación Frente Grande y dirigentes de gremios incorporados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), docentes, médicos, *militantes* católicos vinculados a la orientación de la Teología de la Liberación y, principalmente, miembros de dos organizaciones que de ahí en adelante lograrían reconocimiento público: la “Red de Barrios”, perteneciente a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, de ahora en adelante), a su vez integrante de la CTA, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de ahora en adelante).

³ Tilly considera que se produjo un pasaje desde un repertorio **parroquial** (orientado a objetivos y asuntos locales antes que nacionales), **particular** (con formato variable de situación en situación, de grupo en grupo, de tema en tema) y **bifurcado** (acción directa en torno a objetivos locales y pedidos de intervención de autoridades establecidas –curas, terratenientes, funcionarios– en lo que concierne a asuntos nacionales) hacia otro **cosmopolita** (que cubría un amplio rango de objetivos y asuntos, incluyendo asuntos nacionales), **modular** (porque se utilizaba el mismo formato para una amplia gama de asuntos) y **autónomo** (porque sus participantes se dirigían al objeto de sus reclamos en su propio nombre, a través de interlocutores de su mismo rango) que se consolidó en el siglo XIX.

En trabajos previos sostuve que el piquete constituía una forma que contenía elementos tales como actos ritualizados que indican su comienzo y su final, categorías sociales para definir modos de participación, técnicas de organización del espacio y las actividades, normas y prohibiciones, y terminologías para definir la experiencia de los sujetos (Manzano, 2005, 2007). El sentido de esta forma era anunciar un conflicto social para demandar la intervención del Estado en torno a programas de empleo.

En tanto forma social, *el piquete* adquiere su especificidad en comparación con otras. Los organizadores la asemejaban al proceso de ocupación de tierras y formación de asentamientos que tuvo lugar en La Matanza durante la década del 80.⁴ Incluso algunos dirigentes bautizaron a los piquetes con el nombre “*Asentamiento Germán Abdala*”, en homenaje a un sindicalista fallecido.⁵ Más allá de las diferencias y semejanzas, me interesa remarcar que el modelo de la ocupación de tierras se reactualizó en el piquete tanto a partir de la trayectoria de los dirigentes de la FTV y la CCC como de un gran número de personas que provenían de los asentamientos formados durante los años 80. En este marco, sostuve que el piquete no constituía simplemente un **bloqueo** de ruta sino una **ocupación** de la ruta, cuya base es el modelo de ocupación de tierras (Manzano, 2005, 2007).

A lo largo de la década del 90, ambas organizaciones también ocuparon de manera recurrente edificios públicos y plazas para demandar mercaderías, y delegaciones municipales para “exigir” chapas y colchones ante situaciones provocadas por inundaciones o granizo. Se debe destacar que, independientemente de los “objetos” de demanda (tierra, alimentos, programas de empleo, colchones, chapas, etc.), la *acción de ocupación* aparece como una forma constante de vinculación con el Estado, cuyo propósito se orienta a iniciar o retomar negociaciones con autoridades gubernamentales.

En función de estas observaciones, en este trabajo me propongo profundizar el análisis sobre los procesos de ocupación. Desde una perspectiva de antropología política, interrogo las características de la trama de relaciones políticas y cotidianas que hacen posible la

⁴ En el próximo apartado analizo ese proceso. De todas maneras, un estudio pormenorizado sobre las ocupaciones de tierras y formaciones de asentamientos en La Matanza puede consultarse en Merklen (1991).

⁵ Germán Abdala murió el 13 de julio de 1993, cuando tenía 38 años de edad, a causa de un cáncer localizado en la base de su columna vertebral, que durante años lo había obligado a movilizarse en silla de ruedas. Fue pintor de autos en la Secretaría de Minería de la Nación y en esa dependencia fue electo delegado, posteriormente, junto con Víctor De Gennaro formaron una agrupación sindical que ganó la conducción de ATE. En la década de los setenta, había iniciado su militancia en el peronismo y durante la última dictadura militar participó activamente en Organismos de Derechos Humanos. Integró la nómina de diputados nacionales en la lista que llevó como candidato a presidente a Carlos Menem en el año 1989, pero junto con otros siete legisladores peronistas conformaron un grupo (“el Grupo de los Ocho”) para oponerse a las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno, como la privatización de los ferrocarriles. Este grupo se distanció del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, y Abdala protagonizó intensos debates públicos contra el neoliberalismo entre 1990 y 1992.

recurrencia de estos procesos y el modo en que se configuran vínculos entre sectores subalternos y distintos niveles de gobierno.

Este enfoque retoma los aportes del equipo de investigación coordinado por la Dra. Lygia Sigaud, sobre ocupaciones de tierras en zonas rurales de Brasil (Sigaud et al., 2006). Esta investigación procuró explicar por qué ocupar tierras y montar campamentos se constituyó en una forma legítima de anunciar conflictos sociales y demandar la intervención estatal en torno a la reforma agraria en Brasil (Sigaud, 2004). Para responder esta pregunta, se reconstruyó la trama social en la que se inscribían las ocupaciones en la región de Pernambuco, prestando atención a la interdependencia entre los cambios en la producción y las exportaciones de la caña de azúcar; el rol de los *patrones* de los ingenios y los administradores de usinas; las estrategias, así como también la cooperación y el conflicto, del Movimiento Sin Tierra y los sindicatos rurales; las trayectorias sociales de quienes ocupaban tierras, y las acciones del Estado (Sigaud et al., 2006). Dentro de este esquema general, otras contribuciones se centraron en las ocupaciones como formas características de la acción colectiva en el Brasil contemporáneo (Carvalho Rosa, 2005), en las modalidades de movilización de las familias que toman parte en las ocupaciones, denominadas “*trabajo de base*” dentro de los movimientos (Ernández Macedo, 2005), y en la gestión cotidiana de las relaciones políticas y las sanciones disciplinarias hacia el interior de los campamentos (Rangel Loera, 2005).

En términos más amplios, el enfoque que propongo recupera contribuciones antropológicas al estudio de los movimientos sociales y los procesos de resistencia. En esta disciplina las investigaciones sobre movimientos sociales atienden no sólo a la organización de la acción colectiva sino también al campo político y social dentro del cual la movilización ocurre (Escobar, 1992; Burdick, 1998; Edelman, 2001).

En esta ponencia procuro ubicar a los piquetes en una reflexión enmarcada en las particularidades de los procesos de ocupación. Para el desarrollo de esta argumentación, en la primera parte analizó los procesos de ocupación de tierras en La Matanza durante la década del 80. El propósito de este análisis es mostrar una modalidad de vinculación política configurada en torno al Estado como interlocutor principal y en la cual se destacan acciones que incorporaron medidas de fuerza directa e instancias de negociación y concertación. En la segunda, mostraré la especificidad de la ocupación de rutas teniendo el cuenta el modelo de ocupación de tierras pero destacando las relaciones políticas particulares y las experiencias de vida cotidiana. Hacia el final, retomó la discusión conceptual con los trabajos centrados en la

categoría de acción colectiva y con el uso en investigaciones argentinas de los conceptos de *repertorio y ciclo de protesta*.

Finalmente, las reflexiones que aquí se presentan son el resultado de una investigación doctoral apoyada sobre un trabajo de campo intensivo que se prolongó entre los años 2000 y 2006 en el distrito de La Matanza. En ese trabajo se combinaron estrategias metodológicas como la observación en el terreno, entrevistas en profundidad a sesenta personas, la reconstrucción de trayectorias de vida y la recopilación de fuentes secundarias.

LAS OCUPACIONES DE TIERRAS EN LA DÉCADA DEL 80

Un antiguo edificio escolar abandonado ocupado por mujeres de la organización Amas de Casa del País del barrio Santa Emilia⁶ en La Matanza era el centro nacional de la CCC, en tanto que la oficina de una cooperativa de consumo y vivienda del barrio El Campo se había transformado en la sede central de la FTV. Ambos barrios se habían formado en la década del 80 a través de procesos de ocupación de tierras.

Los barrios Santa Emilia, Tierra Nuestra, 24 de Enero, 17 de Noviembre y El Futuro se formaron en el marco de un proceso de ocupación de tierras que se inició en 1983 sobre una de las márgenes de la ruta nacional 3, a 27 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una zona en la que convergen las localidades de Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo y González Catán. En esas tierras habían funcionado hornos de fabricación de ladrillos, estancias y quintas, y fueron funcionarios municipales quienes propiciaron inicialmente esas ocupaciones:

“Yo vine a ocupar el barrio Santa Emilia en el 83... Comentaban que estaban ocupando. Yo vivía en San Justo, sobre la calle Arieta, y una tarde me fui a ver a María Eva y ella me dijo la verdad, me contó que era una ocupación. Ella mandaba para acá y todos los que ocupamos nos conocimos acá. Acá se había hecho un núcleo de atorrantes, que me peleaba todos los días con esos atorrantes, porque tenías que pagar, pagar y pagar para todo. Como yo me hice respetar de entrada, a mí no me jodieron más, pero jodieron a otros” (Juan Carlos, 54 años, presidente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

“Yo estaba trabajando, estaba en un trabajo de albañilería y me dicen: ‘Ahí en el 25 están dando terrenos’. Me dicen que vaya a la Municipalidad, que estaban entregando terrenos. Entonces me voy a la Secretaría, y estaba la gorda María Eva y dice: ‘Andá, allá está una comisión, andá y pedí allá’. Eran parientes de María Eva, estaban cargados de terrenos. Bueno, vengo acá y me dan. Yo vengo como agarraban todos, ponían una estaquita y ya

⁶ Los nombres de los barrios son ficticios, siguiendo las convenciones del trabajo de campo antropológico.

estaba el terreno. Me dieron otro lado, más para allá... Al otro día vengo y también estaba todo ocupado. Entonces quedaba esta parte, y había un pariente de María Eva que también lucraba, vendía casillas con paneles de camiones y de coches –el tipo vendía casillas para ocupar el terreno y lucraba con eso–, entonces me dice: ‘Venite tal día que vamos a tomar allá’. Fuimos una banda. Decía: ‘De acá para acá, vos’, y así. Claro, agarrando los terrenos... Y así fue. Y digo: ‘De acá no me mueve nadie, acá me quedo, con cuatro chapas, pero me quedo’” (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

Se ocuparon las tierras desde marcos de relaciones familiares, laborales y vecinales, y a partir de la mediación de autoridades municipales. En este sentido, funcionarios estatales del gobierno local controlaron los alcances del sistema de acceso a la tierra, asignando y delimitando predios.

La principal reivindicación impulsada por las organizaciones conformadas en esos barrios fue el acceso a la titularidad de la tierra. Desde la relación con el Estado, se elaboraron proyectos para la sanción de una ley de expropiación. Con esos proyectos no sólo se intentaba acceder a la titularidad de la tierra sino también desplazar a aquellos sectores políticos que proponían la formación de cooperativas y mutuales para la compra de los terrenos. En el barrio Santa Emilia, la propuesta de expropiación se formuló con el asesoramiento jurídico de abogados ligados por afinidad política con los representantes de la Junta Vecinal, mientras que en otro, como Tierra Nuestra, fueron funcionarios del Ente del Conurbano Bonaerense quienes presentaron la iniciativa ante un grupo de personas que venía participando en la implementación local de un programa estatal de asistencia alimentaria.

La reivindicación de la titularidad de los terrenos generó conexiones cotidianas entre los representantes de las organizaciones barriales y funcionarios estatales, que incluyeron el recorrido, casi diario, por dependencias gubernamentales:

“Fuimos tantas veces a La Plata, nos hemos peleado con tantos, pero también hemos encontrado funcionarios que realmente nos han dado una buena mano. En la Legislatura recorríamos todos los espacios, todos los legisladores... Nos íbamos en colectivo, nos tomábamos La Costera Criolla en la rotonda de San Justo, con todas las carpetas. Salíamos a eso de las seis o las siete de la mañana y volvíamos a eso de las once de la noche. Continuamente era eso así” (Ramón, 58 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia, actual integrante de la CCC).

“Yo era delegada de mi manzana y lo que más me gustaba era la lucha por la tierra. Entré más por eso, por la lucha por las tierras, eso me interesaba un montón. Fue largo, muy sacrificado, pero a su vez dio frutos viajar a La Plata: tenías que estar, golpear puertas, ir de la puerta de los peronistas, los justicialistas, los radicales, y golpear y golpear y esperar, y que te tenían que atender... Pero dio resultados, fue muy bueno” (Dora, 54 años, integrante de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y miembro de la CCC).

“El tema de las tierras costó sacrificio porque acá ella (se refiere a Violeta) ponía el salario del marido para el viaje a La Plata; y no es que viajábamos a La Plata una vez por semana o una vez por mes, viajábamos dos o tres veces por semana, y es un costo económico. Ir a La Plata implicaba –disculpame la palabra– cagarte de hambre, cagarte de frío, cagarte de sed en verano; ir con el boleto justo porque no se podía gastar una moneda de más, ni para el agua con esos calores... Vos debés conocer La Plata y sabés lo que es en el invierno ni siquiera tener para comprarte un pocillo de café. Y volver a la noche, a veces con frustraciones, porque ibas y no obtenías nada... Y eso, ¿viste?, te lleva a valorar el trabajo que hiciste porque fue un sacrificio enorme (...)” (Mauricio, 46 años, dirigente de la sociedad de fomento del barrio Tierra Nueva, integrante de la FTV).

Un grupo reducido de pobladores asumió la tarea cotidiana de seguir el proceso global que condujo a la sanción de la ley de expropiación. De acuerdo con los testimonios citados, esa tarea se definía como *sacrificada y costosa*. Implicaba viajar dos o tres veces por semana a la ciudad de La Plata y permanecer allí durante todo el día, comiendo y bebiendo muy poco. Como los viajes eran costosos, en el barrio Santa Emilia se formó una “*Subcomisión de Damas*” que se dedicaba, entre otras cosas, a recaudar fondos (rifas, bailes, bingos, etc.) para costear los gastos de la tramitación vinculada con la “tierra”, la cual estaba, sobre todo, en manos de los varones. En el transcurso de esos años se generó un vínculo cotidiano entre los representantes barriales y los agentes estatales. En otros términos, quienes viajaban a La Plata desarrollaron habilidades para manejar relaciones con el Estado, como ordenar y encarpetar la documentación, solicitar audiencias con autoridades gubernamentales y legisladores, participar en reuniones con personas de diferente rango y establecer lazos de proximidad con algunos funcionarios públicos.

Además de esas acciones cotidianas, se organizaron movilizaciones colectivas a dependencias gubernamentales para “forzar”, por medio de la acción directa, el compromiso legislativo para la sanción de la ley de expropiación:

“Tomamos el Parlamento. Fuimos todos los barrios. Salimos de madrugada y estuvimos allá a las nueve de la mañana. Y de a poquito, de a poquito, fuimos entrando donde estaban todos los senadores y diputados: ‘Acá aprueban o revientan’...” (Juan Carlos, 54 años, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Emilia y actual coordinador nacional de los desocupados de la CCC).

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la mencionada ley en 1992. El Estado provincial compró las tierras con una partida presupuestaria del Ente del Conurbano

Bonaerense⁷ y en un acto celebrado en septiembre de 1995, en el barrio Santa Emilia, el Presidente de la Nación entregó los títulos de propiedad a los “ocupantes”. Después de una serie de negociaciones e intercambios sobre el valor de la tierra ocupada, finalmente el gobierno provincial vendió a 1 peso el metro cuadrado de terreno, con la posibilidad de pagar el precio total en cuotas extensibles a veinte años.

Junto con la reivindicación de la titularidad de la tierra, se generaron distintas acciones para transformar las *ocupaciones* en *barrios*; las principales giraron en torno a la extensión del tendido eléctrico, la perforación del suelo para la obtención de agua, la apertura de calles, el pedido de circulación de transporte público de pasajeros, la limpieza de arroyos, la recolección de residuos, y la construcción y equipamiento de escuelas y centros sanitarios. En muchos casos se trató de acciones basadas en el trabajo comunitario y la reciprocidad vecinal, mientras que en otros se iniciaron procesos de demanda al Estado y a empresas de servicios (transporte público o suministro eléctrico), que incluyeron tramitaciones (petitorios, cartas, censos, encuestas, etc.) y medidas de fuerza directa (manifestaciones a empresas de servicios públicos y a dependencias gubernamentales, cortes de la ruta nacional 3, etc.).

El Campo, 22 de Febrero y 17 de Abril fueron otros de los barrios que se conformaron en un proceso de ocupación de tierras a mediados de la década del 80, en una zona de La Matanza en la que confluían las localidades de Isidro Casanova, Ciudad Evita y Gregorio de Laferrere.⁸ Esas ocupaciones fueron motorizadas por integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que mantenían vínculos con los protagonistas de las primeras *tomas de tierra* en la zona sur del Gran Buenos Aires en 1981⁹ y con militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Durante la madrugada del 6 de enero de 1986, ciento ochenta familias ocuparon un predio de propiedad estatal y, con la ayuda técnica del Serpaj, asignaron y delimitaron las extensiones de los terrenos. Integrantes de las CEBs se habían contactado con ellas cuando desarrollaron tareas de asistencia a causa de dos inundaciones sufridas por el barrio La Primera en mayo y noviembre de 1985. Varias personas fueron reubicadas en

⁷ El Ente del Conurbano Bonaerense recibía su presupuesto del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Este fondo destinado prioritariamente a programas sociales, fue creado en 1992 por la Ley nacional 24.073/92 de Reforma Impositiva. Se formó con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, girado directa y automáticamente para ser ejecutado y administrado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires (Grassi, 2003).

⁸ Para esta descripción me baso en testimonios recogidos en mi trabajo de campo, el estudio de Merklen (1991) y el diario *Clarín*, 14/2/86.

⁹ Diversas investigaciones señalan que integrantes de Comunidades Eclesiales de Base impulsaron las primeras “tomas de tierra” entre los años 1981 y 1982 en la zona sur del Gran Buenos Aires, específicamente en una franja fronteriza entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, que comprende las localidades de San Francisco Solano y Rafael Calzada (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Merklen, 1991; Cravino, 1998). Es interesante subrayar que el Movimiento de Trabajadores de Desocupados de Solano incluye familias de los barrios que surgieron tras esas ocupaciones. Específicamente, en agosto de 1997 se constituyó el MTD en la parroquia del barrio San Martín (MTD de Solano y Colectivo Situaciones, 2002).

predios cercanos pertenecientes a la Comisión Municipal de la Vivienda, y esto dio origen a los barrios 22 de Febrero y 17 de Abril. La organización de esos tres asentamientos se basaba en delegados por manzana, articulados en un cuerpo de delegados que representaba a todo el barrio. Además, se formaron comisiones especiales que se encargaron de las tramitaciones para la obtención de la titularidad de la tierra y de otras demandas, como la construcción de una escuela primaria, un jardín maternal y un centro de salud.

En líneas generales, este proceso de ocupación difería del que describí previamente en cuanto a la modalidad de acceso a la tierra, puesto que en él se distinguía un proyecto de planificación colectiva anterior, producto de iniciativas de miembros de las CEBs que contaban con el asesoramiento de personas y organizaciones experimentadas en el tema. Por otra parte, si bien la reivindicación central era la titularidad de la tierra, en el caso del barrio El Campo, se formó una cooperativa que ofició de mediadora entre el Estado y los “ocupantes”.

Más allá de las diferencias en el origen de una y otra ocupación, me interesa detenerme sobre el hecho de que tanto el barrio Santa Emilia como El Campo impulsaron, prácticamente al mismo tiempo, diversas acciones cuyo eje fue el problema de la desocupación. ¿Se trató simplemente del reemplazo de la reivindicación de la tierra por la del trabajo? Considero que el proceso es más complejo y que la reflexión se torna infructuosa si se procura establecer cómo se reemplazó una demanda por otra. Desde mi punto de vista, lo interesante aquí es cómo se utilizó una modalidad asociada a la demanda de la tierra para incorporar en ella la demanda por *trabajo*. Esta modalidad se distingue por:

- La capacidad de generar iniciativas en torno a la provisión de diversos bienes (tierra, luz eléctrica, agua, escuelas, centros sanitarios, etc.), que requieren la intervención del Estado.
- La ocupación de tierras o espacios públicos en general (dependencias gubernamentales, plazas, rutas, etc.) como una forma de presentar públicamente demandas y forzar el compromiso de funcionarios gubernamentales.
- Habilidades aprendidas respecto de los mecanismos de funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales: tecnologías de presentación de demandas (encuestas, censos, cartas, petitorios, etc.), modos de circulación de expedientes, tipos de trámites, y convenciones para tratar con legisladores o autoridades gubernamentales.

-La trama organizativa basadas en juntas vecinales, cooperativas, delegados por manzana y cuerpos de delegados por barrio.

-El entrenamiento para articular a diferentes sectores sociales alrededor de un eje de demanda.

En suma, se trata de una modalidad configurada en torno al Estado como interlocutor principal y en la cual se destacan procesos que incorporaron medidas de fuerza directa e instancias de negociación y concertación.

LAS OCUPACIONES DE RUTA EN LA DÉCADA DEL 90

Los integrantes de la FTV de La Matanza reconocían haber aprendido los secretos de un “piquete” a partir de la experiencia previa de la CCC. En efecto, a lo largo de la década del 90, algunos de los barrios que luego se incorporaron a la CCC habían bloqueado la ruta nacional 3 para reivindicar la titularidad de las tierras ocupadas o para “apoyar” a los piqueteros de la provincia Salta, que habían sido desalojados de la ruta 34 por la Gendarmería.

En términos generales, la CCC de La Matanza se apropió de la “tecnología” del piquete en un marco más amplio de relaciones políticas y sindicales. Esta organización, conformada en 1994, se define como una corriente político-gremial de alcance nacional; así, los dirigentes de La Matanza mantuvieron contactos asiduos con representantes de las provincias de Salta y Jujuy, y éstos fueron los encargados de transmitir, en diálogos informales o en plenarios nacionales, las principales técnicas empleadas en los piquetes del norte argentino. Además, la CCC se encuentra vinculada con un partido político de orientación maoísta que, en virtud de su caracterización del capitalismo argentino, dedicó gran parte de sus intervenciones a consolidar “frentes políticos” en áreas rurales. En relación con esto último, los dirigentes de la CCC de La Matanza refieren haberse inspirado en la experiencia de los trabajadores del Ingenio Las Palmas, de la provincia del Chaco, quienes bloquearon rutas en el año 1987 por el cierre de ese centro productivo:

“Nosotros tomamos como experiencia, aprendimos muchos de ellos, que los primeros cortes de movimiento obrero de acá fue del Ingenio Las Palmas, en el 87; fueron los primeros cortes prolongados. Entonces nosotros aprendimos mucho de ellos. Pero lo que pasa que en el primer corte que nosotros quisimos hacer, de quedarnos un tiempo largo, no escuchamos a ellos. Decíamos: ‘No, pero es otra provincia’. Lo de ellos era más difícil que lo nuestro porque donde ellos cortaban era monte, no era que tenían barrios, casas donde esconderte,

donde correr... Pero después aprendimos” (Juan Carlos, 53 años, coordinador nacional de los desocupados de la CCC)

Las experiencias del Ingenio Las Palmas y de los piquetes de las provincias de Salta y Jujuy actuaron como referencias generales para la organización de “cortes prolongados” en La Matanza. Desde 1997, la CCC procuró impulsar este tipo de cortes con el objetivo de *“hacer bajar a los funcionarios”* cuando demandaba la incorporación de los primeros setenta beneficiarios en un programa de empleo de la órbita de la provincia de Buenos Aires. Su propósito era anunciar la ruptura de acuerdos en torno a programas de empleo e instar a la intervención directa y personalizada de funcionarios estatales. Esos primeros cortes de ruta, que duraron como máximo cuarenta y ocho horas, resultaron ser, entre otras cosas, ensayos para ir precisando y redefiniendo algunos elementos de la forma del piquete, tales como la organización de un sistema de relevo y la intensificación en el entrenamiento de la *“autodefensa”*:

“Al principio, cuando nosotros preparábamos palos para salir, había una resistencia porque no querían la violencia, eran muy pacifistas; entonces se armaban discusiones sobre lo que había que tener para defenderse. Después, ya el palo es como que está incorporado; si no tenés el palo, es como andar desnudo” (Ramón, 58 años, miembro de la Junta Vecinal 7 de Mayo del barrio Santa Emilia, integrante de la CCC).

En síntesis, la CCC se apropió de la forma del piquete desde marcos de relaciones políticas y sindicales, y procuró adaptarla al distrito de La Matanza en varias ocasiones desde mediados de la década del 90. Desde las trayectorias sociales de varios de los integrantes de la CCC y la FTV de La Matanza, la forma del piquete se resignificó apelando a prácticas históricas enmarcadas en los procesos de ocupación de tierras que tuvieron lugar en el distrito durante los años 80. Para entender el curso de esta apropiación, resulta pertinente un aspecto de la propuesta de Tilly (2000) que define los repertorios de acción tomando como referencia los repertorios teatrales para enfatizar la combinación entre libreto histórico e improvisación, y para apuntar, como hemos visto aquí, la manera en que los sujetos innovan, aprenden y construyen el propio sentido de la acción.

Si bien la forma del piquete fue apropiada progresivamente por las organizaciones de La Matanza, vale entonces preguntarse por qué fue recién en el año 2000 cuando se consolidó como una forma de establecer vínculos con el Estado.

Es indudable que el piquete se afianzó en el distrito de La Matanza en un contexto de transformación social donde el índice de desocupación de ese partido alcanzaba al 17,5% de

la población económicamente activa y el de subocupación, al 15,2%.¹⁰ Como señale en la introducción, la política estatal frente a la desocupación consistía en la puesta en funcionamiento de programas de ocupación transitoria, conocidos popularmente como “planes”.¹¹ Sin embargo, las transformaciones sociales y las políticas estatales no explican por sí mismas por qué se generalizó el piquete como una forma de demandar la intervención del Estado sobre el problema de la desocupación y cómo los programas estatales de ocupación transitoria pasaron a formar parte de las demandas de la FTV y la CCC, y de las expectativas de quienes confluyeron en el piquete. Para esto, es necesario poner de relieve un conjunto de relaciones que se tensaron y expresaron a través del piquete.

El gobierno municipal de La Matanza sancionó en mayo de 2000 la Ordenanza 10.786/00, por medio de la cual se declaraba al municipio en “Emergencia Ocupacional, Sanitaria y Educacional”, y se creaba un Consejo de Emergencia integrado por el intendente, miembros de los tres bloques del Concejo Deliberante –en aquella época, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frepaso– y representantes del Obispado de San Justo, de Cáritas, de las pequeñas y medianas empresas, de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la CTA, de la CCC y de la FTV.

El 28 de junio de 2000, la CCC y la FTV, organizaciones miembro del mencionado Consejo, realizaron un boqueo sobre la ruta nacional 3 que se prolongó durante veinticuatro horas y se “levantó” a cambio del compromiso asumido por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de aumentar la cantidad de programas estatales de ocupación transitoria y el volumen de alimentos destinados a La Matanza.

Por aquella época, el distrito de La Matanza contaba con un total de 1400 beneficiarios de programas estatales de ocupación transitoria. Algunos de esos beneficiarios, habían sido incorporados en esos programas a partir de movilizaciones y “gestiones” emprendidas por la CCC y por algunos barrios de la FTV. Frente a esas cifras, la propuesta conjunta elaborada por autoridades nacionales, provinciales y municipales consistió en el incremento del número de beneficiarios, a razón de 1000 por mes, en los citados programas, y en la entrega mensual de 70.000 kilos de alimentos secos y 65.000 de alimentos frescos.

Sin embargo, debido al incumplimiento del gobierno nacional respecto de lo pactado en el mes de junio, a lo que se sumó la cancelación de beneficiarios en los programas estatales

¹⁰ Datos elaborados por la Consultora Equis.

¹¹ Desde 1996 se sucedieron diferentes programas: Trabajar, Programa de Emergencia Laboral, Barrios Bonaerenses (del ámbito provincial), y Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, entre otros.

de ocupación transitoria y la falta de pago del beneficio para otros, se fue configurando un pliego de demandas que se expresaron públicamente a partir de los piquetes de noviembre de 2000 y mayo de 2001:

“Tenemos menos planes a nivel nacional; el principal problema que tenemos por delante es el pago de 580 compañeros antes de fin de año” (CCC, Guión de Discusión Política, septiembre de 2000).¹²

El objetivo principal de los piquetes de La Matanza fue generar el compromiso del Estado en relación con la distribución de programas de empleo. Se solicitaba el aumento del número de beneficiarios en programas de empleo con la misma fuerza que se requería al gobierno nacional que “cumpliera” con compromisos asumidos, reintegrara a los beneficiarios “caídos” y abonara la deuda que mantenía con otros beneficiarios de los mencionados programas. En otras palabras, con los piquetes se procuraba “resituarse” la relación configurada con el Estado, por lo menos desde el año 1997, en torno a los programas de ocupación transitoria.

Una mirada global sobre este proceso permite establecer una serie de precisiones. Desde el año 1998, la CCC y la FTV habían incorporado aproximadamente cuatrocientos beneficiarios en programas de empleo transitorio mediante movilizaciones hacia dependencias gubernamentales o vínculos con funcionarios estatales centrados en la tramitación, la apertura de expedientes y la presentación de proyectos. Si a partir de esos procedimientos, basados en el conocimiento del funcionamiento de las dependencias gubernamentales, ambas organizaciones habían logrado vacantes en programas de empleo, ¿por qué comenzaron a demandar al Estado aplicando la forma del piquete? Para responder a esta pregunta es preciso atender a la confluencia y reforzamiento mutuo de una serie de procesos.

Hacia el año 2000, a medida que se difundía que la CCC y la FTV habían obtenido vacantes en programas estatales de empleo, se acercaron masivamente representantes barriales en busca de *planes*. Ante el “desborde”, como calificaron los dirigentes a esos años, se comenzaron a confeccionar listados con el nombre y apellido de quienes aspiraban a obtener un programa de empleo, y los dirigentes barriales se dedicaron a “*abrir barrios*”; es decir, a recorrer calles y viviendas ofreciendo la inscripción en esos listados. Las personas que se inscribían quedaban comprometidas a participar en las acciones que fueran necesarias para ingresar en los programas estatales, según expresaron algunos dirigentes: “*Nosotros no ofrecíamos un puesto de trabajo sino un puesto de lucha*”.

¹² El Guión de Discusión Política es un documento que produce la CCC para difundir entre los dirigentes.

Al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de personas inscriptas con la expectativa de acceder a un programa de empleo, el gobierno disminuía el número de beneficiarios de ese tipo de programas. En 1999 se produjo un cambio de gobierno y la Alianza gobernante, integrada por la Unión Cívica Radical y un agrupamiento conocido como Frepaso, procuró implementar un registro único de beneficiarios de programas sociales, para lo cual endureció los requisitos que debían cumplir los destinatarios. Como consecuencia, comenzó a disminuir la cantidad de vacantes en programas de empleo, y esto afectó a quienes ya habían logrado acceder a ellos. El beneficio se cancelaba, tal como lo pusieron de manifiesto los testimonios citados, aduciendo fallas administrativas: errores ortográficos en las planillas, incompatibilidad de la letra “ñ” con el programa informático u omisiones en números de documentos.

En suma, el aumento en los niveles de desocupación y subocupación, el tipo de intervención estatal centrado en programas de ocupación transitoria, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un programa de empleo a partir del vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes en programas de empleo durante el año 2000 contribuyeron a que el piquete se instalara como forma social óptima para demandar y comprometer al Estado.

De manera articulada, en el piquete se expresaron diversas motivaciones y experiencias de vida cotidiana. En su mayoría, los participantes eran movilizados en pequeños grupos coordinados por *referentes* o *dirigentes* barriales con la expectativa de ingresar como beneficiarios a programas de empleo o sostener ese beneficio. Permanecer en los piquetes también representaba una forma de sociabilidad, distracción u ocupación. Por lo general, se compartía la comida y se visitaban carpas de otros barrios, donde se encontraban parientes o amigos que hacía tiempo que no se frecuentaban.

Me interesa puntualizar otros aspectos vinculados con la expectativa de quienes formaron parte de los piquetes. Participar en cortes de ruta prolongados no era la única alternativa disponible para ingresar como beneficiarios a programas de ocupación transitoria; en ese sentido, los testimonios relatados en el marco de mi investigación dan cuenta de pasajes por diferentes organizaciones y por centros barriales vinculados con partidos políticos, tales como las unidades básicas. Se vuelve relevante, entonces, explicar por qué para un conjunto de personas el vínculo con la CCC y la FTV, y la participación en los piquetes, se transformaron en una posibilidad para acceder a los mencionados programas. Explicar este

proceso requiere de una mayor profundidad de análisis; pero aquí dejo planteados dos procesos vinculados con él. Por un lado, un gran número de personas que participaron en los piquetes eran pobladores de los asentamientos formados en la década del 80; todos ellos habían logrado el título de propiedad de las tierras ocupadas y mejoras en la infraestructura de los barrios a partir de procesos de demanda al Estado impulsados por dirigentes locales que luego se incorporaron a la CCC o a la FTV. Así, permanecer junto a estas organizaciones formaba parte de la confianza depositada en esos líderes barriales, cimentada en su probada pericia para lograr un ingreso masivo en programas de ocupación transitoria. Por otro lado, ambas organizaciones extendieron su influencia sobre distintas zonas de La Matanza a partir de la labor de *referentes* o *dirigentes* barriales. Éstos contribuyeron a crear la demanda de *planes* entre los pobladores de sus respectivos barrios y, a la vez, se erigieron como una alternativa en el trayecto que diferentes personas emprendieron para ingresar a los programas de ocupación transitoria.

En otro orden, los piquetes en La Matanza también se convirtieron en espacios de articulación y confluencia entre diversos sectores sociales, políticos y religiosos. Los sindicatos de trabajadores docentes y estatales formularon reivindicaciones relacionadas con las áreas de educación y salud (nombramiento de personal, construcción de nuevos hospitales o escuelas, insumos, reparaciones edilicias, etc.); integrantes de CEBs ejercieron sus convicciones religiosas, como la creencia de que Jesús vive entre el pueblo, y miembros de fuerzas políticas zonales plantearon su disconformidad con medidas tomadas por funcionarios gubernamentales a quienes habían apoyado con su militancia para acceder a esos cargos.

CONSIDERACIONES FINALES

En el caso de La Matanza, el piquete puso en juego –y, en este sentido, reactualizó– experiencias y saberes previos ligados a las ocupaciones de tierras de la década del 80; por ello, la acción del piquete fue considerada una acción de “ocupación”. Desde otro ángulo, mis observaciones también identificaron diversas normas disciplinarias que regulaban el piquete (prohibición de la ingesta de drogas y alcohol; del robo; y de peleas entre los manifestantes) que procuraban alejarlo de visiones que pudieran acercarlo al “desorden” y “caos” asociados con los “saqueos a comercios”.

Aspiro a que el análisis que he presentado contribuya a matizar algunas interpretaciones académicas que agrupan bajo la categoría de repertorios de acción colectiva

de las clases populares a piquetes, puebladas, estallidos y saqueos (Merklen, 2005), sin considerar las relaciones específicas que expresan estas formas, así como tampoco a los sujetos que se las apropian y las redefinen desde contextos y tramas relacionales locales.

En relación con lo anterior, una segunda cuestión abordada en esta ponencia ha sido la reconstrucción del contexto de apropiación de la forma-piquete en La Matanza. Al mismo tiempo que se producían los cortes de ruta de noviembre de 2000 y mayo de 2001, ocurrían otros con características similares en diferentes provincias de Argentina (Salta, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Chaco y Jujuy) y en diversos partidos del Gran Buenos Aires (Quilmes, Almirante Brown, Lanús, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata). Un número importante de estudios académicos, siguiendo las elaboraciones de Tarrow (1997), definió ese hecho como **ciclo de protesta** (Svampa y Pereyra, 2003; Schuster, 2005; Massetti, 2004). En este marco, un ciclo de protesta se inicia cuando algún grupo lleva a cabo una acción disruptiva, logra resultados e invita a otros a promover acciones similares. Desde mi punto de vista, en esa interpretación, la acción se impone por sobre la trama de relaciones sociales que la hacen posible y se reduce la historicidad a una sucesión de ciclos u olas de protesta. A partir de mis materiales de campo, me interesó mostrar, para el caso de La Matanza, cómo la CCC se apropió de la forma del piquete desde marcos de relaciones políticas y sindicales, y procuró adaptarla a ese distrito en varias ocasiones desde mediados de la década del 90. La generalización del uso de esta forma obedeció menos al efecto de un “ciclo” que a la suma de procesos que se expresaban de un modo particular en el distrito de La Matanza, tales como el aumento en los niveles de desocupación y subocupación, el tipo de intervención estatal centrado en programas de ocupación transitoria, el engrosamiento de los listados que registraban la cantidad de personas que aspiraban a obtener un programa de empleo a partir del vínculo con la FTV y la CCC, y la disminución de vacantes en programas de empleo evidenciada desde el año 2000.

En otros términos, el enfoque centrado en el concepto de protesta social, inspirado en la escuela estadounidense de la acción colectiva, limita el análisis de la vinculación entre la acción de protesta y la cotidianidad de los sujetos y desarrolla una narración del proceso histórico reducida a la sucesión de ciclos o repertorios de acción colectiva. El sentido de la protesta se interpreta como resultado de ciclos de acción colectiva y la vida cotidiana se aborda con el objetivo de resaltar los factores subjetivos de los episodios de “beligerancia popular”. Como mostré en otro trabajo, estos enfoques expresan una tradición académica más amplia sobre la que gravitan, en muchos casos soterradamente, las formulaciones de Parsons

sobre “sistemas sociales de acción” (Manzano, 2007). De esa manera, el foco de las investigaciones recae sobre la reconstrucción de “factores” (culturales, subjetivos, emocionales, identitarios, materiales, etc.) considerados capaces de explicar el origen, desarrollo y declive de la acción colectiva.

Inquieta por los vacíos interpretativos que dejaban las teorías de la acción colectiva, cuyo enfoque se tornó dominante en la interpretación de los procesos de movilización social ocurridos en Argentina durante la última década, emprendí una investigación orientada a restituir las tramas de relaciones sociales, políticas y cotidianas. Desde una perspectiva antropológica, que recupera una mirada de los procesos históricos y las experiencias de vida cotidiana (Grimberg, 2005), analicé el sentido y la forma de las protestas a partir de la reconstrucción del contexto en el que se inscribían y de la capacidad de significación de sujetos sociales activos.

Desde esa perspectiva, una visión histórica indica la recurrencia de ocupaciones, fundamentalmente de espacios productivos desde mediados de la década del 50, tras el derrocamiento del gobierno peronista. Impulsadas por diversas líneas sindicales, se planteaban en oposición a medidas tales como la racionalización de la producción, la disminución salarial, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de puestos de trabajo, y se inscribían en acciones de huelga; en pocos casos, se intentó poner en marcha la producción bajo control obrero o a partir de la cogestión obrera (Lobato y Suriano, 2003; Fernández Álvarez, 2006).

A la luz de esta tradición histórica, las acciones analizadas en esta ponencia reúnen características específicas: por un lado, se trata de ocupaciones de espacios públicos; por otro, se plantean desde relaciones estatales. Los datos de campo pusieron en evidencia que uno de los propósitos centrales de este tipo de ocupaciones era que “*bajaran los funcionarios*”; es decir que se orientaban a iniciar o retomar negociaciones con funcionarios estatales para establecer o resituar compromisos de las autoridades gubernamentales.

Las ocupaciones de espacios públicos, entonces, representaban acciones directas para forzar el compromiso de autoridades gubernamentales. En caso de tener éxito, se abrían espacios de negociación y se desencadenaban una serie de pasos rutinarios que ponían en contacto cotidiano a los protagonistas de las ocupaciones con distintos niveles de gobierno: trámites, inicios de expedientes, presentación de documentación, elaboración de censos, reuniones y audiencias.

Thompson (1995), refiriéndose a los motines de subsistencia en Inglaterra en el siglo XVIII, sostuvo que las acciones directas ponían a prueba a los gobernantes a partir de las respuestas que daban y que, en varios casos, se transformaban en oportunidades para legitimar y reforzar la autoridad. Recuperando ese aporte, se puede señalar que los cortes de ruta prolongados de noviembre de 2000 y mayo de 2001 se convirtieron en una posibilidad para el intendente municipal de La Matanza, quien sometió a prueba un estilo de gestión centrado en el reconocimiento del conflicto, la pobreza y la desocupación, para ganar posiciones en la negociación con el gobierno nacional y provincial. A partir de relaciones anteriores, como la declaración del estado de “Emergencia Ocupacional, Sanitaria y Educacional” del distrito y la creación de un Consejo de Emergencia, en el cual participaron la CCC y la FTV, los piquetes se convirtieron en otro medio posible para proyectar reivindicaciones a otras instancias de gobierno y capturar recursos.

Ahora bien, resta un análisis pormenorizado de aquellas situaciones en las cuales las ocupaciones de espacios públicos fracasaron en su propósito de establecer negociaciones con autoridades gubernamentales y, a la inversa, oportunidades en las que se obtuvo el compromiso de funcionarios estatales sin recurrir a la acción de fuerza directa. Se puede concluir, entonces, que el sentido, el alcance y los límites de las acciones resultaron relativos al contexto histórico y a la trama relacional en la que se entretajan.

Bibliografía

Aristizábal, Zulema e Izaguirre, Inés (1988): *Las tomas de tierras en el Sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Auyero, Javier (2002): *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina Democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA.

----- (2004): *Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Burdick, John (1998): *Blessed Anastácia. Women, race and popular Christianity in Brazil*. New York-London: Routledge.

Carvalho Rosa, Marcelo (2005): “Quando o sentido é o movimento: a “forma movimento” como modelo contemporâneo de ação coletiva no Brasil”. Ponencia Presentada en la VI Reunión de Antropología del MERCOSUR, Montevideo-Uruguay.

Cravino, María Cristina (1998): “Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones”. En Neufeld, María Rosa; Grimberg, Mabel; Tiscornia,

Sofía y Wallace, Santiago (comp.): *Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA. Pp. 261-284.

Edelman, Marc (2001): "Social Movements: Changing paradigms and forms of politics". En *Annual Reviews of Anthropology*, 30, pp. 285-317.

Ernandez Macedo, Marcelo (2005): "Entre a violência e a espontaneidade: reflexões sobre os procesos de mobilização para ocupações de terra no Rio de Janeiro". En *Mana*, 11 (2), pp. 473-497.

Escobar, Arturo (1992): "Culture, practice and politics. Anthropology and the study of social movements". En *Critique of anthropology*, 12 (4), pp. 395-432.

Farinetti, Marina (1999) "¿Qué queda del "movimiento obrero" ?. Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina". En *Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas ticas políticas en sociedades segmentadas*, V. 1 (1).

Fernández Alvarez, María Inés (2006): "De la supervivencia a la dignidad. Una etnografía de los procesos de recuperación de fábricas en la ciudad de Buenos Aires." Tesis de Doctorado: Universidad de Buenos Aires-Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

Grassi, Estela (2003): *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I)*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Grimberg, Mabel (2005): "Protesta Social y Resistencia o el problema de los límites de la hegemonía". Ponencia presentada al *1º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología*, Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.

Lobato, Mirta y Suriano, Juan (2003): *La protesta social en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Manzano, Virginia (2007): "De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete". Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social. Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras-UBA.

------(2005): "Desempleo, 'piquetes' y acción estatal en Argentina: Análisis antropológico de la configuración de un campo de de relaciones sociales y políticas". En *Actas de la VI Reunión de Antropología del Mercosur*, Montevideo, Uruguay 16-18 de octubre de 2005. Publicación de la ponencia completa en C.D.

Massetti, Astor (2004): *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias-FLACSO.

Merklen, Denis (1991): *Asentamientos de La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos Editora

------(2005): *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.

Quirós, Julieta (2006): *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.

Rangel Loera, Nashieli (2005): “Limpiando os maus elementos: arranjos políticos e disciplina num acampamento do MST”. Ponencia Presentada a la *VI Reunión de Antropología del MERCOSUR*, Montevideo-Uruguay.

Schuster, Federico (2005): “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”. En Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián (comp.): *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. Pp.43-84.

Sigaud, Lygia et. al. (2006) “Os acampamentos da reforma agrária: historia de uma surpresa”. En Benoît de L’Estoile y Sigaud, Lygia (org.): *Ocupações de terra e transformações sociais*. Rio de Janeiro: Editora FGV. Pp. 29-63.

Svampa, Maristella (2005): *La sociedad excluyente. La Argentina baja el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): *Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

----- (2005): “La política de los movimientos piqueteros”. En Schuster, Federico, Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel; y Pereyra, Sebastián (comp.): *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. Pp.343-364.

Tarrow, Sydney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

Tilly, Charles (2000): “Acción colectiva”. En *Apuntes de Investigación del CECyP*, pp. 9-32.

Thompson, E. P.(1995): *Costumbres en común*. Madrid: Crítica.